

EJECUCIÓN.DESESTIMACION OPOSICION IMPAGO PENSIÓN DE ALIMENTOS.
CELEBRACION VISTA EN PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ES FACULTAD DEL JUEZ
560 LEC. ABUSO DE DERECHO NO ES CAUSA DE OPOSICION.

**Sentencia Audiencia Provincial de Valladolid de 22 de diciembre 2022 Número
Sentencia: 280/2022 Número Recurso: 552/2021 Numroj: AAP VA 1511/2022 Ecli:
ES:APVA:2022:1511A Ponente: FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA
Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 13 de VALLADOLID**

Jurisdicción: Civil

Ponente: [FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 22/12/2022

Tipo resolución: Auto

Sección: Primera

Número Sentencia: 280/2022

Número Recurso: 552/2021

Numroj: AAP VA 1511/2022

Ecli: ES:APVA:2022:1511A

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

AUTO: 00280/2022

Modelo: N10300

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MGG

N.I.G. 47186 42 1 2012 0001828

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000552 /2021

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 13 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: EFM EJECUCION FORZOSA EN PROCESOS DE FAMILIA
0000045 /2021

Recurrente: Jose Ramón

Procurador: OSCAR JUAN ABRIL VEGA

Abogado: LUISANGEL DUQUE COLINO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Estefanía

Procurador: , ABELARDO MARTIN RUIZ

Abogado: , ANA DE LA CRUZ CRIVELLI

A U T O

Ilmo. Sr. PRESIDENTE: D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA.

Ilmos. Sres. MAGISTRADOS:

D. FRANCISCO SALINERO ROMÁN

D. JOSÉ RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL

En Valladolid, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

Visto en grado de apelación el presente procedimiento de OPOSICION A EJECUCION FORZOSA EN PROCESOS DE FAMILIA nº 45/21 del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Valladolid, seguido entre partes, de una como EJECUTANTE-APELADA D^a Estefanía , representada por el Procurador D. ABELARDO MARTIN RUIZ y defendida por la Letrada D^a ANA DE LA CRUZ CRIVELLI y de otra como EJECUTADO-APELANTE D. Jose Ramón , representado por el Procurador D. OSCAR JUAN ABRIL VEGA [MGG1] y defendido por el Letrado D. LUIS ANGEL DUQUE COLINO, habiendo intervenido el MINISTERIO FISCAL, sobre apelación de auto de fecha 12.7.21.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los hechos de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, se dictó Auto con fecha 12.7.21, que fue aclarado por Auto de fecha 19.7.21 cuyas partes dispositivas dicen así: "DEL AUTO DE FECHA 19-

7-21: "SE ACUERDA: desestimar íntegramente la oposición a la ejecución promovida por el Procurador Sr. ABRIL VEGA en nombre y representación de Jose Ramón en su escrito de fecha 17/5/2021 contra el auto de fecha 9/4/2021; y declarar procedente que la ejecución siga adelante por la cantidad fijada en ese auto: 15.000 € en concepto de principal más 4.000 € calculados prudencialmente para costas e intereses; todo ello, con expresa imposición de las costas causadas en este incidente a la parte ejecutada".

DEL AUTO DE ACLARACION DE FECHA 19-7-21: "Desestimar la petición formulada por el Procurador D. Oscar Juan Abril Vega en nombre y representación de D. Jose Ramón de aclarar el auto de fecha 12-7-21, dictado en el presente procedimiento."

TERCERO.- Notificado a las partes el referido auto, por la representación procesal de D. Jose Ramón se interpuso recurso de apelación dentro del término legal, alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria y por el Ministerio Fiscal se presentaron escritos de oposición al recurso de apelación. Remitidos los autos del juicio a este Tribunal y personadas las partes, se señaló para la deliberación y votación el día 12 de julio de los corrientes, en que tuvo lugar lo acordado.

VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado, D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.-OBJETO DEL RECURSO.

Por la representación procesal de Jose Ramón se formula recurso de apelación contra el auto de fecha 12-7-2021, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Valladolid, PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE FAMILIA 45/2021 , que desestima la oposición a la ejecución formulada por el hoy apelante.

En síntesis, la parte apelante apela el auto por entender que:

1. Se le ha producido indefensión al no haberse celebrado vista y, consiguientemente, por no haberse practicado la prueba solicitada.
2. El ejecutado ha sufrido una evidente reducción de sus ingresos
3. La ejecutante ha incurrido en un abuso de derecho, que el auto recurrido no reconoce, porque la ejecutante pretende cobrar unos alimentos que el ejecutado viene prestando directamente a la menor, y porque ha acumulado las reclamaciones de los últimos 5 años.

La parte apelada y el Ministerio Fiscal se oponen al recurso de apelación formulado de contrario e interesan la confirmación del auto por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.-SOBRE LA SUPUESTA INDEFENSIÓN POR NO HABERSE CELEBRADO VISTA.

Como ya hemos razonado en nuestro auto de 24-2-2022 resolviendo sobre la prueba interesada en segunda instancia por la parte apelante, la posibilidad de que se celebre vista en el procedimiento de ejecución de sentencia y, con ella, de que se practique prueba testifical u otras distintas de la prueba documental, es, conforme al art. 560, párrafo tercero, **una facultad del Juez de instancia** y, como tal facultad, ni puede causar

indefensión, ni puede ser revisada en apelación, máxime cuando, conforme a lo que se dirá, la prueba interesada y no practicada versa sobre determinados hechos que no constituyen causa de oposición a la ejecución.

TERCERO.-.-SOBRE EL ABUSO DE DERECHO COMO CAUSA DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN EN PROCESOS DE FAMILIA.

No desconoce esta Sala de apelación el criterio extensivo de algunas Audiencias Provinciales (y el aislado criterio del auto 117/2018 dictado por esta misma Sala) en relación con las causas de oposición que pueden alegarse en los procesos ejecutivos de familia, y que pretenden salir al paso de la estrechez con la que se ha regulado el proceso ejecutivo en general y el incidente de oposición en particular que no se adecuaba bien a las especiales y cambiantes situaciones de los procesos de familia. Dicho criterio parece correcto de lege ferenda.

Pero, **de lege data, no es éste el criterio de esta Sala de apelación** que, como ya ha expresado en anteriores ocasiones (por todas, AAPVA, Secc.1ª, de 30- 11-2011 y 30-6-2014 en relación, por ejemplo, con la alegación de la compensación y, más recientemente sobre el abuso de derecho y el enriquecimiento injusto AAPVA 4/2020 y 31/2020), considera que hay que estar a lo que el legislador ha establecido y que no es dable, en ejercicio de cierto voluntarismo judicial, forzar una Ley que aparece clara en este extremo, que fija de manera taxativa y como *numerus clausus* las causas de oposición a la ejecución, y **que en su art. 564 LEC. excluye del incidente de oposición** a la ejecución aquellos hechos o actos, como pueden ser el abuso de derecho distintos de las causas de oposición legalmente previstas, y remite al declarativo correspondiente su resolución.

Por todas las anteriores consideraciones, el motivo de apelación invocado debe ser desestimado.

Pero, al solo objeto de agotar argumentalmente las cuestiones planteadas, cabe señalar:

1. Que compartimos el criterio de la Juez de instancia, aunque ello no sea la base de nuestra resolución, de que la manera procedente de abordar de cara al futuro, y de ser cierta la situación de directa manutención de la menor por el progenitor no custodio y su repercusión sobre la pensión alimenticia, es el procedimiento de modificación de medidas y no la oposición a la ejecución, incidente que no puede transformarse en un proceso declarativo que deje sin efecto lo establecido en una sentencia firme.

2. Que, por el contrario, los alegatos sobre la nulidad de actuaciones de la parte apelante ponen de manifiesto una contradicción interna en el auto apelado. El auto parece admitir, aunque sea a título excepcional, el abuso de derecho como causa de oposición siempre que sea notorio e incuestionable. Y añade que el ejecutado debe acreditar de forma plena y rotunda ese ejercicio abusivo del derecho o, lo que es lo mismo, a la vista del debate que se suscita en el caso de litis, debe probar que es él el que viene atendiendo las necesidades de alimento de la hija común.

Pero si ello fuera realmente así, debería haberse celebrado vista que permitiese la práctica de la prueba interesada por el ejecutado para acreditar el abuso de derecho y el enriquecimiento injusto, pues en tal caso no podría regir - y esta es una manifestación más de los problemas que surgen al forzar la interpretación de la Ley y ampliar el ámbito de las causas de oposición a la ejecución - la limitación relativa a la prueba documental del art. 556 LEC, que está prevista para unas causas de oposición como son el pago o cumplimiento y la transacción, que de ordinario pueden y deben acreditarse por prueba documental, pero que nada tienen que ver con el abuso de derecho que exigen, de ordinario, una prueba más amplia que la mera documental.

CUARTO.- SOBRE LA REDUCCIÓN DE LOS INGRESOS COMO CAUSA DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN.

Debemos reiterar aquí los mismos argumentos que en el fundamento de derecho anterior. Como bien dice en este caso la Juez de instancia, la reducción de los ingresos del obligado al pago de los alimentos no es causa de oposición a la ejecución, aunque podrá hacerse valer, en su caso, a través del correspondiente procedimiento de modificación de medidas.

QUINTO.- COSTAS.

De conformidad con los arts. 398 y 394 de la LEC., procede condenar en costas al apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey y por la potestad jurisdiccional que la Constitución Española nos concede.

FALLO:

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Jose Ramón contra el auto de fecha 12-7-2021, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Valladolid, PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE FAMILIA 45/2021, debemos confirmar y confirmamos el expresado auto en todos sus pronunciamientos, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que se dará el destino legal. (D. A. 15ª de la L.O.P.J. según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados del Tribunal. Doy fe.

[MGG1]

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.